

## **SOBRE EL CUARTO RETIRO DE 10% DE LOS FONDFOS DE LA AFP**

Minuta preparada para la senadora Yasna Provoste Campillay por el abogado Luis Eduardo Thayer Morel

El cuarto retiro del 10% “por única vez” que ya aprobó la Cámara de Diputadas y Diputados confirma que no estamos frente a un problema técnico, sino frente a una evidente realidad política que comenzó a gestarse hace 4 décadas sobre la base de una gran “mentira” que mutó en una gran “verdad”.

Fue un recurso de protección en Antofagasta y otro en Punta Arenas, interpuestos a fines de 2019, los que dejaron al descubierto un acertijo jurídico que permanecía oculto como un tema que nadie se atrevía a mover, pero que estaba latente. Los recursos plantearon a la respectiva Corte que como “dueños” de los dineros de sus cuentas individuales de su AFP, necesitaban retirarlos íntegramente con el fin cubrir ciertas necesidades urgentes.

La “verdad judicial” surgió del Tribunal Constitucional (TC). Su fallo resolvió que, de acuerdo con el derecho a la seguridad social garantizado por el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política del Estado, las *cotizaciones obligatorias enteradas en las cuentas individuales*, solo podían ser objeto de una “*especie de propiedad*”, ya que su exclusivo destino *era pagar pensiones*, concepto de propiedad muy distinto al definido por el Código Civil que permite el uso, goce y disposición de los bienes de una persona.

Así, la interpretación del Tribunal Constitucional zanjó la discusión jurídico-académica sobre la propiedad y el objeto de los fondos previsionales. Gráficamente, podría decirse que el o la cotizante es “formalmente” dueño(a) de los dineros que cotiza y que salen de su sueldo o de su patrimonio a su cuenta individual de la AFP, pero que “realmente” **“al cotizar se hace dueño(a) del derecho a la seguridad social”** y, en virtud del ejercicio de esta garantía constitucional asegurada, adquiere el derecho a percibir una pensión, sea el mismo (a), o bien, sus beneficiarios en el caso que fallezca.

Entonces, el problema ya no es jurídico. Es político y surgido del hecho de que, tanto la publicidad engañosa de las AFP como las declaraciones y comentarios de autoridades, exautoridades, académicos, columnistas, editorialistas, etc. han difundido durante 40 años al país entero la *“muletilla”* de que “los o las cotizantes son dueños(as) de su cuenta individual de la AFP”. Y el problema revienta cuando, a raíz de la pandemia del Coronavirus, las personas pierden sus empleos, deja a muchísimas sin poder trabajar en su actividad independiente debido a las cuarentenas, o bien, comienzan a recibir un reducido y decreciente subsidio de cesantía sin estar cesantes. A ello se sumó un Estado incapaz de brindar ayuda oportuna. Las personas caen en la desesperación de la incertidumbre y, debido a la necesidad de obtener dinero de algún lado, empiezan a reclamar esa plata que siempre se les ha sido reconocida como propia, pero que no podían tocarla, porque se trataba del “ahorro forzoso” para una futura pensión.

Y este hecho político se agranda y genera indignación cuando las personas van tomando conciencia de que “su plata” la están aprovechando los grandes consorcios empresariales del mundo para desarrollar sus negocios. Así, a la indignación se agrega la desconfianza y una especie de sentimiento que podría describirse de una *“traición institucionalizada”*, cuando se evidencia que, mientras muchos pasan hambre y las penurias de la pandemia encuarentenada, “ese dinero que te pertenece” es recibido por grandes empresas como una potente *“inyección de plata fresca y barata, tanto como un crédito a largo plazo que no tiene fecha de pago, porque se trata de la inversión de tu ahorro para que rente”*.

Entonces, el desastre de la economía, el alza del dólar, la inflación que se pueda desatar, las pérdidas que acarreará la liquidación anticipada de los fondos para solventar -sobre todo- este cuarto retiro, más todas las consecuencias que se puedan imaginar de lo anterior, sencillamente, no son, una explicación suficiente frente a una **“masa crítica”** de trabajadores y trabajadoras cotizantes que con legítima desconfianza y suficiente molestia no quieren que una AFP y ningún otro, les administre o maneje lo que les es propio.

Menudo problema que deberá enfrentar el Senado, además, con la presión de la “discusión inmediata” urgida por el gobierno.

Me parece que el Senado -los senadores más bien- antes que nada, debe asumir que el problema hace mucho rato dejó de ser técnico y pasó a ser estrictamente político. Por eso, una respuesta debe ser política.

Con el mayor respeto, me atrevo a sugerir, como ejemplo, un camino que permita debatir una salida política distinta que la espera de un quinto retiro y que pueda, al mismo tiempo, contener los vaivenes que los retiros de fondos puedan ocasionar a la economía, sin perder de vista su pertenencia a las y los cotizantes:

**Primero**, no se vislumbre otra forma de quitar la presión social que no sea con la aprobación del cuarto retiro. Su rechazo por más razones técnicas que existan podría arriesgar consecuencias políticas de la indignación colectiva incubada y a definirse en fechas muy cercanas a un segundo aniversario del 18 de octubre.

**Segundo**, sin afectar las propuestas programáticas de Yasna Provoste y Gabriel Boric, generar un consenso con las siguientes variantes:

- a. Establecer desde ya la pensión básica universal garantizada de \$ 225.000 para el 90% de la población más vulnerable, mayor de 65 años, financiada íntegramente por el Estado. Ésta se recibirá siempre y a todo evento, sin restricciones. (el monto propuesto esta costado y validado).
- b. Propugnar que en el nuevo sistema previsional el pilar contributivo de cargo de las cotizaciones de trabajadores y empleadores contemple para quienes cumplan la edad para jubilar, **junto con recibir siempre la pensión básica universal**, la posibilidad de optar por:
  - retirar hasta un 93% de todos sus fondos previsionales, dejando sólo un 7% para la cotización de salud;

- Retirar un porcentaje menor al 93% y establecer con el saldo una pensión contributiva que se suma a la pensión básica universal garantizada.

O bien,

- Recibir una pensión contributiva que se suma a la pensión básica universal, calculada sobre la base de todas las cotizaciones aportadas por trabajadores y empleadores con factores de solidaridad intra e intergeneracional.

**Es un camino sustentado en la libertad de las personas y no en la imposición forzada de un modelo.** Se trata de aprovechar la ventaja que tiene proyectar un sistema de pensiones que, como todos, son a muy largo plazo, porque transcurren más de cuarenta años entre que una persona cotiza por primera vez, supongamos, a los 20 años y el día que cumpla la edad de jubilación. En definitiva, la tarea de la política es resolver un problema actual y urgente, con sentido social y de realidad; teniendo la visión suficiente para no convertir la solución técnica en obstáculo generador de una grieta entre lo político y lo social.